

Arequipa: de la privatización a la recuperación de la dignidad

Por Carlos Leyton Muñoz*

Durante los últimos veinticinco años en el Perú se produjo un viraje político sustantivo, que pasó de la Propuesta de Reformas Estructurales planteadas por la Junta Militar de Gobierno que se sustentaba en una acción importante del Estado como agente regulador del mercado y asignador de recursos, hacia un modelo liberal cada vez más radical y de corte populista.

Este cambio fue principalmente orientado hacia la modificación de las políticas económicas manteniendo un discurso político de corte populista, que sustentaba un accionar demagógico y clientelista. En los últimos diez años esta situación se profundiza. Bajo los efectos de los dos primeros años del gobierno de Fujimori, en los que se nota una acción decidida y disciplinada contra la subversión, el desorden fiscal y la reinserción del país en el sistema económico internacional, se consigue una amplia popularidad y “legitimar” un autogolpe de Estado que rompió con la débil institucionalidad existente, instaurando un modelo político autoritario y centralista.

La apuesta por la modernización de la sociedad, la reforma del Estado y la estabilización de la economía fueron los ejes del discurso político, lo que concordaba con las expectativas de la población que durante los años anteriores había empezado a acumular los efectos de una crisis económica y un proceso de empobrecimiento paulatino, que afectaba principalmente a los sectores medios y populares.

En términos sociales, la lucha antiterrorista y el propio actuar de Sendero Luminoso fueron limitando el surgimiento de nuevos líderes sociales. Por el contrario, muchos de los existentes en este período fueron asesinados o conminados a retirarse de su acción en la dirigencia. Esta situación impidió el desarrollo de formas de acción cooperativas y



complementarias a las ya existentes, y fortaleció una negativa relación de subordinación con el Estado a través de las mal llamadas Políticas Sociales.

La viabilidad de este modelo de conducción política se sustentó en una mayor concentración del poder en Lima, que reforzó el centralismo económico social y político, acabando con un incipiente proceso de regionalización que se inició a fines de los '90 y culmina con el autogolpe del '92.

La ausencia de discusión política y planteamientos alternativos a los desarrollados por el gobierno fue disminuyendo la presencia de los partidos políticos y propiciando el surgimiento de personajes que ejercieron un liderazgo y caudillismo en movimientos sociales y políticos, que representaban propuestas muy poco diversas entre sí, matizando en sus críticas la línea de conducción impuesta por el gobierno de Fujimori, en especial lo referido a los acuerdos a los que llegó al inicio de su gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Sobre este tema es importante mencionar que en el debate presidencial de 1990 la propuesta política de Fujimori argumentaba en contra del shock económico y, en menor medida, de la implementación de un proceso de privatización de las empresas del Estado.

* Sociólogo. Vicepresidente del Centro de Estudios para el Desarrollo Regional – CEDER Arequipa, Docente Universidad Nacional de San Agustín.

Sin embargo, una vez que asumió el gobierno implementó uno de los más impresionantes ajustes estructurales con el fin de detener la inflación y ajustar los precios, eliminando subsidios y diseñando una agresiva política de privatizaciones. Si bien los inicios de ese período marcaron el tipo de relación con la Banca Multilateral, también se dio una imagen de disciplina y de orden social que se contraponía a lo que se había experimentado en los últimos años del período de gobierno de Alan García.

Los resultados macroeconómicos de estos primeros años de la década fueron significativos. Se había logrado controlar drásticamente el proceso inflacionario e incrementado el crecimiento económico del país. Asimismo se inició un proceso de reducción de gasto fiscal que tuvo como objetivo la disminución del tamaño del Estado. Al finalizar el período de gobierno se había despedido a aproximadamente 120 mil personas que trabajaban en la administración pública.

Estos resultados no tuvieron efectos significativos en los ingresos de la población. Por el contrario, era cada vez más evidente que los niveles de desempleo y pobreza eran mayores, llegando a estimarse de manera oficial que el 52% de la población del país se encontraba en situación de pobreza y casi el 20% de ella estaba en condición de pobreza extrema, situación que se aceptaba pues se esperaba una reactivación pronta que generara empleo y superara esta condición.

El impacto de la crisis se sintió de una manera más fuerte en las regiones, ya que por la concentración de población y los efectos de la recesión las empresas comenzaron a cerrar, dejando fuera a importantes contingentes de mano de obra.

En Arequipa este impacto fue tal vez más severo, ya que sólo en el Parque Industrial, donde funcionaban aproximadamente cincuenta empresas industriales a inicios de los '90, para el año 2001 sólo estaban operando quince. Muchas de ellas quebraron, pero otras decidieron trasladarse a la capital, en donde las condiciones de mercado les eran más favorables. Adicionalmente, el interés de estos traslados era la eliminación de sobrecostos de operación.

Si bien hubo una política agresiva de mejoramiento de la red vial nacional, sólo se renovó la principal vía nacional y las que se articulaban transversalmente a ella, lo que permitió reforzar el rol de la capital nacional como eje organizador del espacio en desmedro de las ciudades de segun-

do orden. Con ello se limitaron las capacidades regionales para construir mercado interno, y se generó una mayor dependencia de la periferia hacia el centro.

En este contexto se desarrolló el proceso de privatización de las empresas estatales, siendo las más notorias y urticantes las de ENTEL PERU y la Compañía de Teléfonos del Perú, adquiridas por la empresa estatal Telefónica de España, que obtuvo una serie de beneficios que le permitieron desarrollar una acción monopólica en el mercado de las telecomunicaciones, ocasionando en los usuarios una imagen –no sin razón– de prepotencia y abuso con la anuencia de las autoridades de gobierno, que pronto borró de la población la noción de los beneficios que se lograrían con los más de 2.000 millones de dólares que habían pagado por esta empresa.

Lo importante es que entre 1992 y 1998 se privatizaron empresas hasta un monto de por lo menos 9.200 millones de dólares, situación que separará a la población entre quienes apoyaban estas políticas y aquellos que se oponían a ellas.

“...el candidato Toledo lo declaró públicamente y, a posteriori, firmó un acuerdo con los representantes de las Organizaciones Populares de la ciudad: de ser elegido, no privatizaría empresas de servicios en Arequipa.”

De manera sucinta se señalará que los primeros argumentaban a favor, en el sentido de que la inversión privada promovería el crecimiento económico y mejoraría la infraestructura, con lo cual se estaría en condiciones de

mejorar el bienestar y calidad de vida de la población. Hay que mencionar que desde este sector se señalaba que éste era un instrumento de apoyo a la inversión del Estado, sin limitar el rol que éste debe cumplir en el desarrollo del país.

Desde los sectores de la oposición se señaló que este modelo de privatización, caracterizado por la estrategia de “hacer y luego comunicar”, se desarrollaba de espaldas a los intereses nacionales. Sin desconocer la importancia del capital privado como aporte para el crecimiento económico, se señalaba que gran parte del dinero obtenido no estaba siendo utilizado de manera correcta por el gobierno, y que las empresas que se habían adjudicado las propiedades gozaban de beneficios tributarios que afectaban los intereses del país y no cumplían con los cronogramas de inversión de capital fresco a los que se habían comprometido.

Uno de los efectos más graves de este proceso fue que las empresas, en su afán de disminuir los costos de operación y recuperar en el menor tiempo sus inversiones, desarrollaron una agresiva política de despidos de los trabajadores más antiguos y que les generaban cargas sociales mayo-

res. Frente a ello, el gobierno no tomó medidas para frenar lo que en muchos momentos eran abusos que cometían las empresas. Contrario a ello, se dieron leyes que flexibilizaron el mercado laboral, las cuales favorecieron el surgimiento de un movimiento de protesta.

La caída de Fujimori descubrió el escenario de corrupción en el cual éste y Montesinos habían sostenido su gobierno, y quedaron al descubierto las promesas incumplidas y los turbios manejos del dinero obtenido por la privatización.

■ La transición política y los nuevos escenarios para la democracia

Sin duda, hubo que llevar adelante un largo proceso de movilizaciones y enfrentamientos que tuvieron como telón de fondo el proceso electoral del año 2000, caracterizado por la enconada terquedad del gobernante para mantenerse en el poder, a pesar de que para ello se atropellase los derechos ciudadanos más elementales y se hiciese uso indiscriminado de los recursos del Estado para garantizar el triunfo electoral.

Como resultado de ello y de una serie de denuncias sobre corrupción, relaciones con el narcotráfico y tráfico de armas, cayó el gobierno de Fujimori, quedando al descubierto los mecanismos que se habían utilizado para que los medios de comunicación acabasen con los liderazgos no aceptados por los gobernantes. Asimismo, quedaban al descubierto las debilidades de la caja fiscal y con ello las promesas incumplidas de la recuperación económica y las posibilidades de generar empleo y bienestar en el corto plazo.

El gobierno de transición encabezado por Valentín Paniagua buscó ordenar la situación de caos en la que se encontraba la administración pública bajo los principios de participación, concertación y transparencia de la gestión pública, dando a las organizaciones de la sociedad civil espacio para que pudiesen participar en las diferentes iniciativas orientadas a atender los programas de alivio a la pobreza. Logró un significativo éxito, y con ello despertar interés en la población sobre las posibilidades de integrarse organizadamente en procesos de planificación del desarrollo y vigilancia social de la función pública.

El proceso electoral se inicia con una campaña que tiene un importante nuevo actor político, el retorno de Alan García Pérez, y con ello un discurso populista que rescataba el sentido del Estado de Bienestar como paradigma y contrastaba con la posición tecnocrática y liberal de la mayoría de candidatos de ese momento, lo que le valió que en términos de preferencia electoral se convirtiese en una opción posible de pasar a la segunda vuelta con el candidato favorito: Alejandro Toledo.

En la medida en que las distancias en la preferencia electoral eran menores, los candidatos recurrían con mayor frecuencia a las ofertas populistas y demagógicas, que de acuerdo con análisis serios de especialistas resultaban difícilmente alcanzables en el mediano y corto plazo.

En este contexto, el tema de las privatizaciones ocupó un espacio importante. Ambos candidatos señalaron su desacuerdo con la forma en que se habían realizado, y que estas medidas debían ser revisadas. En el caso particular de Arequipa, el candidato Toledo lo declaró públicamente y, a posteriori, firmó un acuerdo con los representantes de las Organizaciones Populares de la ciudad: de ser elegido, no privatizaría empresas de servicios en Arequipa.

■ El gobierno de Toledo

En los primeros meses de su gobierno, Alejandro Toledo aún no logra consolidar una imagen de seguridad en sus acciones, cometiendo diversos errores de carácter político. Quizás el más notorio fue el de seguir actuando como candidato y ofrecer más allá de lo que los recursos de la caja fiscal podían atender.





Por un lado, comenzaban a surgir protestas desde los sectores populares, y antes de los tres meses de gobierno se presentaban los primeros conflictos de carácter popular, siendo el centro de las demandas las mejoras en las condiciones económicas y, específicamente, las políticas sectoriales para mejorar el empleo y reactivar el agro. Por otro lado, las demandas por la descentralización fueron crecientes, propiciando el surgimiento y desarrollo de Frentes Regionales que presionaban por el establecimiento de un marco legal que viabilizase este proceso en el corto plazo. Finalmente, se procesaban las negociaciones con la Banca Multilateral y en especial con el Fondo Monetario Internacional, firmándose la carta de intención pertinente en la que sustancialmente se establecía el mantenimiento de la política económica del régimen anterior y la privatización de empresas del Estado, y debían continuar las llamadas reformas de segunda generación bajo el modelo neoliberal impuesto.

De lo anterior quedó claro que muchas de las ofertas electorales fueron postergadas, y la población comprendió que si bien Toledo había ganado un espacio como líder de la oposición contra Fujimori, en términos económicos era una continuidad de lo hecho por éste último, generándose una sensación de indignación e incredulidad, ya que si Fujimori había mantenido ocultas muchas decisiones que afectaron severamente a los sectores populares, ahora en-

contraban que el nuevo presidente también lo hacía, incumpliendo con lo que había ofrecido.

Rápidamente, y como un caso singular, la popularidad del presidente fue descendiendo hasta niveles mínimos (15%). A pesar de ello, y dadas las necesidades de nivelar la Caja Fiscal y el pago de la Deuda Externa, ante la posibilidad de un déficit presupuestal creciente a inicios de este año se decidió continuar con la privatización de las empresas de servicios eléctricos de acuerdo con un cronograma establecido entre el FMI y el gobierno.

Las primeras protestas surgen de los sindicatos de estas empresas, intentando llamar la atención de los diversos sectores sociales. Asimismo, intentaron influenciar en el congreso a fin de promover una norma que prohibiese la privatización de dichas empresas.

■ **El conflicto de Arequipa**

A inicios del presente año se constituye el Frente Amplio Cívico de Arequipa (FACA), conformado por organizaciones representativas de trabajadores, asentamientos humanos populares, sindicatos de docentes y otros gremios de la ciudad, cuyo objetivo principal fue conformar una plataforma amplia de diálogo y propuesta para enfrentar la política económica que se estaba imponiendo. Como parte de esta plataforma se incluyó lo referente a la privatización de las empresas regionales.

Se tomaron diversas medidas de lucha, siendo las más importantes llevar a cabo acciones de difusión sobre las medidas que estaba tomando el gobierno y paros regionales cada quince días en tanto éste no rectificase su propuesta de privatización.

Desde el gobierno, la Comisión de Privatización (COPRI) continuó con el cronograma establecido, licitando y vendiendo las empresas de transmisión de energía eléctrica ETECEN y ETESUR –que fueron adjudicadas a una empresa colombiana– siendo las siguientes las Empresas de Generación Eléctrica de Arequipa y el Sur EGASA y EGESUR.

Mientras tanto el malestar de la población se iba incrementando, ya que nuevamente se estaba actuando de espaldas a los intereses de la población, reclamándose mayor información sobre este proceso. Los encargados de la privatización, con el fin de “informar” sobre su significado, elaboraron y transmitieron spot publicitarios que afectaban a la identidad de los arequipeños, por lo que fueron rechazados unánimemente, polarizando la discusión entre aquellos que apoyaban la privatización y los que estaban en contra de ella. En el mes de mayo se convoca a la licitación de estas

empresas y el conflicto se agudiza: las protestas fueron más radicales, incluyendo a nuevos sectores de la sociedad.

En este contexto se incorporan a la lucha los alcaldes tanto provinciales como distritales.

Ante la insistencia de las autoridades gubernamentales en discutir la propuesta de privatización y la ausencia de opciones alternativas, los dirigentes del FACA iniciaron una huelga de hambre para llamar la atención del gobierno y promover un diálogo para modificar las decisiones y características de la privatización.

En tanto, el sentimiento de indignación y rechazo al gobierno se generalizó en Arequipa. El movimiento social comenzó a incrementarse sin una conducción política, alentado sólo por el sentido de que se estaban atropellando los intereses de la ciudadanía y se estaba disponiendo de las propiedades que no le pertenecían al gobierno.

Esta situación llegó a su mayor gravedad cuando el alcalde provincial y otros alcaldes distritales se aunaron a la huelga de hambre para evitar que la privatización se concretara.

A pesar de esta medida, la licitación se ejecutó, dando como ganadora a la empresa TRACTEBEL SA, de origen belga, el día viernes 14 de junio. Inmediatamente surgió un movimiento de carácter espontáneo que congregó a todos los sectores sociales, los cuales confluyeron al centro de la ciudad paralizando las actividades económicas y levantando barricadas para impedir el tránsito en las principales vías.

Estas manifestaciones expresaban la protesta del pueblo por el maltrato que las autoridades de gobierno estaban dando a la población, cuando desde las versiones oficiales se minimizaba el sentido de la protesta y se calificaba a los participantes como movimientos de grupos radicales.

Los días posteriores significaron una generalización de la movilización que obligó al gobierno a desplazar a efectivos policiales y al ejército para controlar el orden en la ciudad.

Desde ambos lados se produjeron excesos en el uso de la violencia, que tuvieron como resultado la muerte de dos personas impactadas con bombas lacrimógenas. Este fue el escenario en el cual se realizó la negociación para la suspensión de las medidas de fuerza y el retiro de las fuerzas del orden, dejando establecido que sería el poder judicial el encargado de definir sobre la propiedad de las acciones de estas

empresas, así como que debía llevarse a cabo una consulta popular para determinar la procedencia de la privatización.

Si bien en términos concretos este resultado no era el más esperado por la población, el movimiento generado expresó el rechazo a medidas autoritarias y la falta de transparencia en la gestión pública.

Desde otra perspectiva, este movimiento significó la recuperación de la dignidad del pueblo, que había sido avasallado durante los últimos años por el régimen autoritario de Fujimori.

Es importante señalar que este movimiento ha permitido identificar cómo los nuevos actores de la sociedad peruana, y en especial de Arequipa, ya no están vinculados a los grupos tradicionales de poder existentes, sino que han emergido otros que son producto de la simbiosis entre el Arequipa tradicional y aquellos que en décadas anteriores llegaron de las zonas andinas, hecho que ha configurado un nuevo espíritu en la sociedad arequipeña, reflejado en las expresiones de lucha que se produjeron durante los días de la crisis en la ciudad.

Esta nueva expresión social es la de los pequeños y microempresarios, los trabajadores informales, los pobladores de asentamientos humanos populares, los sectores medios afectados por la crisis, que se congregan en torno a una identidad regional que tuvo más de tradición que de realidad en los últimos tiempos, recobrando un importante sentido de autoestima social que permite que las autoridades ubicadas en el ámbito de la región adopten una posición firme frente a la privatización de las empresas.

En este contexto se está procesando un momento electoral en el que el tema de la privatización es importante, generando un espacio de confrontación entre aquellos sectores políticos que estarían a favor de un proceso en el que la privatización signifique generar activos para la región, y otros que están en contra de ella de manera radical. Este espacio de confrontación no debe ganar el centro de la discusión sobre el desarrollo regional, sino estar involucrado en los términos y características de las propuestas de cada uno de los grupos políticos participantes en el proceso de las elecciones, teniendo en consideración las demandas del movimiento social que enfrentó la privatización y que queda latente frente a nuevas iniciativas que pretendan avasallar la dignidad y los derechos de los ciudadanos de Arequipa.